

SENTENCIA.

PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN GENERAL.

MATERIA: ACCION DECLARATIVA DE EXISTENCIA RELACION LABORAL, IMPUGNACION DEL DESPIDO, SANCION DE NULIDAD Y DE COBRO DE PRESTACIONES.

DEMANDANTE: SOLEDAD CRISTINA PEÑA Y LILLO MONTECINOS.

DEMANDADA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA REPRESENTADA POR JUAN CARLOS DÍAZ AVENDAÑO.

RIT O – 127 – 2022.

RUC N°22- 4-0392175-4.

En Talca a nueve de diciembre del año dos mil veintidós.

VISTO.

Individualización de las partes litigantes. Que son partes en este juicio en calidad de demandante doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos de profesión profesora de Estado, cédula de identidad número 15.907.841-8, domiciliada en pasaje 12 ½ Sur N° 405, Villa Universitaria de la comuna de Talca, representada en juicio por los abogados don Héctor Sebastián Díaz O'kuington y don Moisés Ignacio López Méndez y como parte demandada Ilustre Municipalidad De Talca, Corporación de Derecho Público, representada por su Alcalde, don Juan Carlos Díaz Avendaño, ingeniero comercial, ambos domiciliados en Uno Norte nro. 797, esquina Uno Oriente, de la comuna de Talca, asistidos en audiencia por el abogado don Pablo Andrés Nadeau Osorio.

De la demanda, sus fundamentos y pretensiones. Que la demandante antes individualizada fundo su demanda en los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen: Que ingresó a prestar servicios en el mes de septiembre del año 2015, bajo vínculo de subordinación y dependencia, para la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Talca, en la oficina de turismo, dependiente del Departamento de Desarrollo



Económico de dicho municipio, teniendo a mi cargo tareas propias de difusión turística a la comunidad, prestar apoyo logístico a las actividades de turismo, realizar catastros de información turística de la comuna, apoyar programas de turismo, difundir atractivos socio-culturales de la comuna y, ofrecer orientación e información turística a la comunidad; todo bajo las instrucciones que eran impartidas por mi jefatura directa, a cargo de doña Constanza Rojas Barrios, Encargada de la Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Talca. Es del caso que en el mes de enero del año 2020 se puso término a ese contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador, no obstante, me fue ofrecido continuar prestando servicios para el municipio, en las mismas funciones, pero esta vez bajo un vínculo de contrato de honorarios y con vigencia a partir del mes de febrero del año 2020.

De esta forma, a partir del 01 de febrero de 2020 continúe prestando los mismos servicios, sin embargo, bajo "vinculo de honorarios" y con fecha 11 de marzo firme ante notario, previo requerimiento de mi jefatura, un finiquito laboral, reconociéndose que se había puesto termino al contrato por "mutuo acuerdo de las partes" y, por el cual, no se me pagó ninguno de los conceptos que corresponden al término de una relación laboral, esto es, indemnización por años de servicios, indemnización por falta de aviso previo en su caso y no siquiera vacaciones proporcionales. Lo cierto es que la necesidad de contar con un empleo me impidió reclamar de lo anterior y termine firmando, ante notario, ese finiquito para - precisamente - mantener el empleo.

De la forma dicha, continúe presentándome a diario en dependencias de la Oficina de Turismo, ubicada en calle 1 poniente con avenida 2 sur N° 978 de la comuna de Talca a efectos de prestar los mismos servicios que realizaba en vigencia de la relación laboral habida con el municipio reconocida por éste. Esas labores siempre fueron ejecutarlas en un horario de trabajo previamente determinado, esto es, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, contando con una hora de descanso destinada a almuerzo.

Asimismo, después de firmado el finiquito antes señalado la demandada - de manera habitual - me hizo firmar sucesivos contratos de prestación de servicios, todos por un tiempo determinado, el último de ellos suscrito el 01 de enero del año 2022, cuya duración se extendía hasta el 28 de febrero del mismo año. No obstante, como se dijo la prestación de los mismos servicios, de manera reiterada e



ininterrumpida, siempre fue realizada primeramente en favor de la Corporación y luego en favor del Municipio de Talca, esto último, a partir de febrero de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2022, época en que se hizo efectiva mi desvinculación. La remuneración pagada ascendió en un inicio a la suma de \$1.100.000 (un millón cien mil pesos) brutos, suma que progresivamente fue aumentando hasta la suma de \$1.198.648 (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos) brutos, siendo esta la última remuneración pagada por la demandada, sin embargo, la misma a partir de febrero de 2020 fue disfrazada bajo la modalidad de boleta de honorarios, conforme así lo exigió la demandada.

En efecto, previo al pago de mis remuneraciones siempre se pidió la emisión de una boleta de honorarios, todo ello mientras esperada la supuesta evaluación para volver a contar con una contratación oficial como trabajador del área en que prestaba labores para la Ilustre Municipalidad de Talca. Sin embargo, lo dicho no aconteció y hasta la fecha de mi despido, pese a que continué trabajando de manera ininterrumpida, prestando los mismos servicios, bajo subordinación y dependencia, nunca se volvió a escriturar un contrato de trabajo y seguí emitiendo las respectivas boletas de honorarios, las últimas de ellas por un mes completo es la de febrero del año 2022, por \$1.198.648 brutos. Como señale desde un inicio la relación laboral se estableció como relación laboral, luego la demandada decidió finiquitar aquella y, sin embargo, continúe prestando los mismos servicios, esta vez, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, aspecto que desde el inicio me pareció extraño, pues me encontraba trabajando para una unidad específica, -la oficina de turismo- con horario -de 08:00 a 17:00 horas-, remuneración mensual, dependencia y subordinación y ejecutando los mismo servicios que antes prestaba en una relación laboral plenamente reconocida.

Reiteró que la demandada me hacía firmar contratos de honorarios de manera sucesiva y, pese a la informalidad laboral descrita, la necesidad del empleo me forzaba a firmar los mismos y, en todos los casos se mantuvieron las mismas funciones, la misma jornada laboral, la remuneración y la subordinación y dependencia expuesta previamente.

La referida forma de contratación se mantuvo a lo largo de toda mi relación laboral con la Municipalidad demandada, es decir, que pese a



prestar servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia, de manera ininterrumpida a lo largo del tiempo, cumpliendo las mismas funciones, con un horario de trabajo y remuneración determinada, la Municipalidad, en abierta infracción a la legislación laboral aplicable, no formalizó el respectivo contrato de trabajo, emitiendo a lo largo del tiempo diversos “contratos a honorarios”, para evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que corresponden. En efecto, pese a trabajar de manera ininterrumpida y cumpliendo las mismas funciones, suscribí sucesivamente un gran número de “contratos a honorarios”, todos con sus respectivos plazos de duración y decretos alcaldicios que los autorizaban, haciendo presente que, además, hubo periodos de tiempo en que pese a no estar vigente el contrato a honorarios - por haber expirado su plazo - y en razón de no haberse dictado el nuevo decreto alcaldicio, continué trabajando de manera normal, registrando asistencia, dando cuenta de mi gestión y emitiendo las respectivas boletas de honorarios. Lo cierto es que los sucesivos contratos a honorarios que suscribí durante todo el periodo en que se extendió la relación con la demandada, reúnen todos los elementos propios de una relación de trabajo conforme a las reglas y disposiciones del Código del Trabajo, esto es, regulando y estableciendo una jornada de trabajo, dependencia y subordinación, estableciendo una remuneración mensual

El despido.

El 24 de febrero del año 2022, fui citada por Constanza Rojas Barrios, Encargada de la Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Talca, a las oficinas del departamento de recursos humanos de la entidad municipal, donde funcionarios de dicho departamento, me indican que mi contrato no será renovado, sin dar razón alguna e indicando que recibían instrucciones para notificar y proceder a mi desvinculación. La comunicación que me fue entregada viene fechada el 24 de febrero del año en curso y, ante mi pregunta por mis remuneraciones del mes de febrero se me dijo que sería pagado oportunamente. Al momento de mi despido no se me pagó indemnización alguna relacionada con el término de mi contrato de trabajo, ni por mes de aviso ni por años de servicios, tampoco se compensó el feriado proporcional, ni mucho menos se encontraban pagadas las respectivas cotizaciones previsionales, ni de salud ni menos el seguro de cesantía y como ya



TKRXXCJZEJR

se dijo tampoco me pagaron las remuneraciones del mes de febrero del año 2022.

Existencia de la relación laboral.

Su condición era la de un trabajador de la municipalidad demandada, ya que prestaba a ésta servicios personales materiales, bajo vínculo de subordinación y dependencia, desempeñando las funciones antes señaladas por encargo expreso de mis jefaturas de la Oficina de Turismo Municipal. Además, debía presentarme a diario en las dependencias de la Oficina de Turismo Municipal, ubicada en calle 1 poniente con avenida 2 sur N° 978 de la comuna de Talca, bajo la supervisión de Constanza Rojas Barrios, Encargada de la Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Talca. Por su lado y como se dijo, la emisión de las boletas de honorarios sólo tenían por objeto, de parte del empleador, encubrir una realidad de carácter laboral, bajo un velo de prestación de servicios, en circunstancias que en la realidad existía una dirección a la cual me presentaba a diario a desarrollar mis labores, existían jefaturas, horarios definidos, remuneraciones establecidas, deber de rendición de cuentas por la labor ejecutada y un sin número de otras circunstancias que solo demuestran la existencia de un contrato de trabajo y de un ardid del municipio demandado para ocultar dicha relación laboral.

En efecto, para que exista una relación laboral se requiere: a) que se presten servicios personales, ya sean intelectuales o materiales, los cuales sin duda preste de manera reitera para la demandada; b) que la prestación de dichos servicios se efectúe bajo un vínculo de dependencia y subordinación, en relación a este requisitos, existe jurisprudencia reiterada y uniforme que señala que la subordinación y dependencia se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la subordinación a instrucciones y controles de diversa índole, circunstancia, ésta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador impartándole órdenes e instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer las mismas, estimándose además, que el vínculo de subordinación está sujeto en su existencia a las particularidades y naturaleza que en cada caso



presente la prestación del trabajador y; c) y que como retribución a los servicios prestados reciba una remuneración determinada, se ha dicho reiteradamente en esta presentación que a causa de los servicios prestados la municipalidad demandada me retribuía mes a mes con un sueldo determinado.

Pues bien, en la especie concurren, respecto del suscrito, todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo. Al respecto, y en primer lugar, prestaba servicios materiales para la demandada, desempeñando funciones como encargada del ornato y aseo de determinadas áreas verdes, previamente señaladas por la propia demandada. En un segundo lugar, la prestación de dichos servicios se efectuó bajo vínculo de dependencia y subordinación, toda vez que en el desempeño de mis labores existió continuidad de los servicios prestados, desde el mes de febrero del año 2020 hasta el mes de febrero del año 2022, haciendo presente que mi contratación no era de aquellas permitidas por la ley bajo boletas de honorarios, además existía obligación de asistencia, cuyo control era permanente y, por último, mes a mes recibía una remuneración fija pagada por la demandada a consecuencia o como causa de la relación laboral.

Por otro lado, cabe señalar que la disposición del artículo 4° de la Ley N° 18.883, no resulta aplicable al caso de autos, toda vez que existió un vínculo de subordinación y dependencia, en los términos de los artículos 1° y 7° del Código del Trabajo, ya que en mi relación de trabajo no se dieron los supuestos de “labores accidentales” y “que no sean las habituales de la municipalidad”, exigidos por la citada norma para autorizar la contratación a honorarios. Asimismo, tampoco se trata de “cometidos específicos” conforme a las normas generales, lo que supone que la contratación a honorarios debe hacerse en la forma y para las situaciones antes planteadas, lo que no ocurre. Al respecto, como señala la Contraloría General de la República de acuerdo con lo prescrito por el artículo 4 de la Ley N° 18.883, los contratos a honorarios proceden en los siguientes casos: a) en general, cuando se trata de cumplir labores accidentales y que no sean las habituales de la Corporación; y b) excepcionalmente, para desarrollar cometidos específicos, propios de las tareas habituales y permanentes de la municipalidad. Por labores accidentales y no habituales, se debe entender aquellas que, siendo propias del municipio, sean ocasionales, o sea, circunstanciales y distintas de las realizadas por el



TKRXXCJZEJR

personal de planta o a contrata. Ahora bien, inclusive existen tareas que siendo accidentales, comienzan a ser ejecutadas periódicamente vía honorarios, constituyéndose en una labor habitual, respecto de esa situación la jurisprudencia ha señalado, "que no corresponde desarrollar indefinidamente labores habituales, empleando el servicio de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, ya que para esos efectos el ordenamiento contempla la existencia de funcionarios de planta y los empleos a contrata" (Aplicando los Dictámenes N°s 25.333 de 1990 y 20.045, de 2003 de la CGR). Lo anterior, dado que el que una tarea sea específica, puntual, claramente determinada en el tiempo, es un elemento que se pierde con la reiteración periódica, toda vez que en ese caso la labor que tuvo el carácter de accidental, pasa a ser considerada como habitual, debiendo el municipio distinguir sus labores propias y habituales, de aquellas susceptibles de desarrollar por la vía de un contrato a honorarios (Aplica Dictamen N° 36.610, de 2001 de la CGR).

Por todo lo dicho, corresponderá que el tribunal declare en la especie que entre el suscrito y la demandada existió una relación laboral por el tiempo que se dirá en el petitorio.

Nulidad del despido.

En atención a los antecedentes de hecho antes descritos y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 162, inciso 5 del Código del Trabajo, que en su parte pertinente indica que, si el empleador no hubiere efectuado el íntegro pago de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo, corresponderá en la especie además declarar la nulidad del despido. En efecto, de la norma indicada se concluye que la causal de nulidad del despido consiste en no haber pagado de manera íntegra y oportuna las cotizaciones previsionales del trabajador por parte del empleador al momento de verificarse el despido. Que, por su parte el artículo 162 en su inciso 7, agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador.

Por tanto, y en atención a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos; y al no encontrarse declaradas ni pagadas mis



cotizaciones previsionales al momento de producirse la terminación del contrato de trabajo y por tanto, no haber producido efecto el término de la relación laboral existente entre las partes, corresponderá que el tribunal declare la nulidad del despido del cual fui objeto, todo con costas. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 162 del Código del Trabajo la nulidad del despido sólo acarrea una sanción para el empleador incumplidor, pero no produce la ineficacia del despido, por el contrario, este despido produce todos sus efectos, por no haberse enterado las cotizaciones de seguridad social, a que se encontraba obligado mi ex empleador. Esta declaración de nulidad se traducirá en sancionar al empleador por su incumplimiento obligándolo a pagar las remuneraciones del suscrito mientras no se paguen mis cotizaciones de seguridad social, pero no obstante aquello, el despido es total y absolutamente eficaz.

En cuanto a la declaración de despido en que no se ha invocado ninguna causa legal.

De lo que se lleva dicho, sostenemos -en síntesis- que entre las partes de este pleito existió una relación o, lo que es igual, vinculación de naturaleza laboral que se inició en febrero del año 2020 y hasta el 28 de febrero de 2022, época en la cual la demandada decidió la no renovación del contrato de prestación de servicios, no invocándose motivo alguno para la desvinculación. Con ocasión del término de la relación laboral la demandada quedo adeudando las indemnizaciones por falta de aviso y por años de servicios y para los efectos de establecer la base de cálculo para el pago de estas indemnizaciones que me corresponden con motivo de la terminación de mi labor de la manera o modo que se ha señalado, habrá que estarse a lo dispuesto en el artículo 172 inciso 2° del código del ramo.

Por consiguiente, las indemnizaciones que se solicitarán en el petitorio de este escrito se calcularán sobre la base del último ingreso mensual íntegro del suscrito, esto es, la suma de \$1.198.648 (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos).

Enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal:

Tal como se ha sostenido, en la especie existió una relación laboral disfrazada por la demandada como "contrato de prestación de servicios a honorarios", seguidamente declarándose la existencia de



ese vínculo laboral es preciso acoger igualmente la declaración de nulidad del despido y, por último, la declaración de que el despido de que fui objeto es injustificado, indebido o improcedente por no existir causal invocada para el mismo.

Como consecuencia de lo anterior, se pide al tribunal las siguientes declaraciones y condenas:

a. -) primeramente se declare que entre las partes de este juicio existió una relación de naturaleza laboral, desde el 01 de febrero del año 2020 y hasta el día 28 de febrero del año 2022, fecha en la que no se renovó mi contrato de prestación de servicios, de manera unilateral y sin expresión de causa por parte del municipio Talquino, o bien, que dicha relación laboral se extendió hasta la época que el tribunal declare.

b. -) se declare que mi último ingreso mensual, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, lo fue la suma de \$1.198.648 (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos).

c. -) Que se declare que el demandado me despidió sin invocar causal alguna y que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la demandada al pago de la indemnización por falta de aviso previo e indemnizaciones por años de servicios que en derecho correspondan.

d. -) que la demandada sea condenada al pago de todas las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, toda vez que la demandada me adeuda cotizaciones previsionales y de salud por todo el periodo trabajado, esto es, del 01 de febrero del año 2020 y hasta el día 28 de febrero del año 2022, o hasta la época que el tribunal declare.

e. -) que se condene a la demandada a la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo (Nulidad del Despido). La parte demandada me adeuda las cotizaciones previsionales y de salud que demando precedentemente, y además, tampoco me ha hecho llegar los comprobantes que acrediten el pago y el estado de mis cotizaciones de seguridad social, motivo por el cual y de conformidad con lo dispuesto, en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, la demandada deberá pagarme las remuneraciones y demás



prestaciones durante todo el periodo comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío y entrega de la comunicación, mediante la cual se me informe que ha pagado, efectivamente las cotizaciones previsionales de salud y cesantía que me adeuda. En tal virtud, demando por este concepto, el pago sin límite de todas las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen durante todo el periodo comprendido entre la fecha de mi despido y la fecha de envío o entrega de comunicación mediante la cual mi ex empleador me comunique que ha pagado, efectivamente mis cotizaciones previsionales.

f. -) además deberá ser condenada la demandada al pago del feriado legal pendiente. Según dispone el inciso tercero del artículo 73 del Código del Trabajo, el trabajador, cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. En la especie tengo derecho al pago de feriado proporcional por los dos últimos años calendario desde la fecha en que enteró mi anualidad hasta la fecha del despido. Por lo expuesto demando por este concepto la suma \$1.678.107.- (un millón seiscientos setenta y ocho mil ciento siete pesos), o bien, la suma que el Tribunal determine.

Por tanto, en atención al mérito de lo expuesto, solicitó se acoja la demanda en definitiva declarar que:

a.) Que se declare que entre las partes de este juicio existió una relación de naturaleza laboral, desde 01 de febrero del año 2020 y hasta el día 28 de febrero del año 2022, fecha en que el municipio talquino opto por no renovar mi contrato, de manera unilateral y sin expresión de causa, o bien, hasta la época que el tribunal determine conforme al mérito de autos.

b.) Que, se declare que mi último ingreso mensual, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, lo fue la suma de \$1.198.648 (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos), o bien, la suma que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso.



c. -) Que se declare que el demandado me despidió sin invocar causal alguna y que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones:

1. -) la suma de \$1.198.648.- (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos), a título de indemnización por falta de aviso previo, calculada tomando como base la última remuneración obtenida de los servicios prestados a mi ex - empleador, o la suma mayor o menor que se determine conforme al mérito del proceso.

2. -) la suma de \$2.397.296 (dos millones trescientos noventa y siete mil doscientos noventa y seis pesos) por concepto de indemnización por años de servicios correspondiente a 2 años, o la suma mayor o menor que SS. determine.

3. -) aumento legal del 50% sobre la indemnización por años de servicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 letra c del Código del Trabajo, ascendente a \$1.968.648 (un millón novecientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos), o la suma mayor o menor que SS. determine.

d.) Que se condene a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales, de cesantía y de salud por todo el periodo trabajado, esto es, desde 01 de febrero del año 2020 y hasta el día 28 de febrero del año 2022.

e.) Que se declare que mi despido es nulo y en consecuencia se aplique la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo (Nulidad del Despido), por lo que la parte demandada deberá pagarme las remuneraciones y demás prestaciones durante todo el periodo comprendido entre la fecha de mi despido y la fecha de envío y entrega de la comunicación, mediante la cual se me informe que ha pagado, efectivamente las cotizaciones previsionales de salud y de cesantía que me adeuda.

f.) Que se condene a la demandada al pago del feriado legal pendiente y feriado proporcional, por la suma \$1.678.107.- (un millón seiscientos setenta y ocho mil ciento siete pesos), o bien, la suma que SS., en derecho determine.

g. -) Que las sumas demandadas y que se ordenen pagar deban ser reajustadas, a las que se les debe aplicar el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispuesto en los



artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y que asimismo se condene a la contraria al pago de las costas de la causa.

h. -) En subsidio de lo anterior, que la demandada sea condenada por los conceptos y los montos que determine conforme al mérito del proceso.

De la contestación de la demanda, sus fundamentos y pretensiones. Que contestando la demanda, la parte demandada solicitó su rechazo fundado en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que se exponen: Que doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos se encontraba vinculada con la Ilustre Municipalidad de Talca mediante contratos de prestación de servicios a honorarios. La relación contractual a honorarios entre la demandante y la Ilustre Municipalidad de Talca inició con fecha 01 de febrero de 2020 y se prolongó hasta el 28 de febrero de 2022. El citado vínculo a honorarios con la demandante no fue de carácter indefinido, puesto que la contratación a honorarios se rige por el plazo fijado en el contrato y por el decreto alcaldicio que aprueba la contratación, y a su vez tiene su fundamento en la necesidad de que se requieran los cometidos específicos o servicios encomendados. Los cometidos específicos y los periodos en que los desarrolló, se pueden desglosar de la siguiente manera: A) Febrero - diciembre 2020: Programa Oficina de Turismo, cometidos establecidos por contrato: “Difundir información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro información oferta turística de la comuna. Apoyar programas de turismo, difundir los atractivos turísticos y socioculturales, ofrecer información y orientación turística a la comunidad. B) Enero - diciembre 2021: Programa Microempresa, cometidos establecidos por contrato: “Profesional que colabore en la elaboración, difusión, ejecución de acciones para el fomento productivo y el emprendimiento”. C) Enero - febrero 2022: Programa Oficina de Turismo de la Unidad de Desarrollo Económico, cometidos establecidos por contrato: “Difundir y promover información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro, información oferta turística a la comuna y apoyar en los proyectos de programas de la oficina de turismo”. De acuerdo a los últimos contratos a honorarios celebrados con la demandante y los decretos alcaldicios que dispusieron su contratación, doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos fue contratado en el contexto del programa municipal denominado “Oficina



de Turismo”, para cumplir cometidos en la Unidad de Desarrollo Económico, estableciéndose expresamente los cometidos que debía desempeñar en los contratos.

En efecto, conforme a los últimos contratos a honorarios celebrados con la demandante y los decretos alcaldicios que dispusieron su contratación, doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos fue contratada en el contexto del aludido programa municipal y cuyos cometidos específicos encomendados fueron los siguientes: “Difundir y promover información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro, información de oferta turística de la comuna y apoyar en los proyectos de programas de la oficina de turismo”. En la cláusula segunda del contrato al que se ha hecho alusión, se acordó que doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos debía cumplir las funciones descritas, en la oportunidad que para tal efecto establezca la Unidad de Desarrollo Económico del Municipio. La cláusula tercera del contrato celebrado, dispuso que la demandante recibirá honorarios mensuales por el desempeño de los cometidos pactados, ascendientes a la suma de \$1.198.648 (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos), debiendo efectuarse la retención legal correspondiente, lo que se pagará por periodos vencidos contra la presentación de la boleta de honorarios. Además, expresa el contrato que se debe entregar un informe de gestión, documento que es requisito previo para el visto bueno del jefe de servicio respectivo en la boleta de honorarios y que respaldará el pago.

Es importante además señalar que los contratos establecían expresamente la fecha en que concluían, reconociéndose además a la Municipalidad de Talca la posibilidad de poner término anticipado lo que se debe comunicar por escrito a la prestadora a honorarios. La cláusula quinta del contrato dispone que el plazo del contrato tendrá una validez desde el 01 de enero y hasta el 28 de febrero de 2022, La demandante, erróneamente refiere en su libelo que entre las partes de este juicio existió una relación laboral regida por las normas del Código del trabajo, lo que contradecemos rotundamente, nunca existió tal relación laboral, no hay subordinación ni dependencia en los términos de dicho cuerpo normativo, no hay control de cumplimiento de jornada u horario de trabajo, siendo solamente de naturaleza civil cualquier vínculo que se haya verificado entre las partes de este juicio. No existe aquel poder de mando u obediencia que refiere la



demandante en los términos de las relaciones laborales sujetas al Código del Trabajo.

Negamos rotundamente la afirmación de la demandante en orden a manifestar que los cometidos encomendados eran ejercidos bajo vínculo de subordinación y dependencia, así como también la afirmación de que estaba sujeta a un horario de trabajo. No es efectivo que la demandante en los hechos estuviese sujeta a cumplimiento obligatorio de una jornada diaria o semanal, y menos que existiera un reloj control u otro sistema de registro para tal efecto. Solo se le exigía el cumplimiento de los cometidos pactados, los que por aplicación del principio de control de la administración debían ser chequeados por el Municipio para poder sufragar al prestador el honorario mensual comprometido. Desde luego cabe señalar que la demandante no estaba sujeta a subordinación y dependencia en los términos del Código del Trabajo, puesto que la naturaleza de la relación contractual es totalmente distinta al ser una de las partes un órgano de la administración del Estado cuyo marco de acción está íntegramente delimitado por la ley, en razón del principio de legalidad que gobierna el derecho público. En efecto, lo anterior no significa que la demandante preste sus servicios sin sujeción a ningún tipo de control, puesto que existe supervisión local del programa de quienes deben velar por el cumplimiento de los estándares de éste. Sobre este punto es relevante señalar que la demanda confunde los elementos propios de la subordinación y dependencia con el sistema de control transversal que pesa sobre toda la administración pública. Es de obviedad que quien presta servicios a la administración y recibe por ello pago de honorarios, debe someterse al procedimiento de control necesario destinado a verificar la procedencia de ese pago, lo que no se relaciona de modo alguno con subordinación y dependencia en los términos del derecho laboral privado. Por tanto, lo que en la práctica se verificó entre las partes de este juicio, fue una relación contractual de naturaleza civil, debidamente autorizada por la ley, en el que se contrata una persona para realizar cometidos específicos. No es efectivo que la Municipalidad de Talca deba el pago de cotizaciones provisionales, de salud y cesantía a la demandante, ya que la naturaleza de la relación contractual a honorarios no contempla forzosa e imperativamente tal posibilidad. No obstante, a contar del año tributario 2018, las personas que se desempeñan como independientes y emiten boletas de honorarios, tienen la obligación



legal de cotizar en los regímenes previsionales y de salud, de tal forma que dicha fórmula permite entre varias cosas, que los cotizantes independientes puedan acceder a los subsidios monetarios otorgados por estos regímenes, cuestión respecto de la que profundizaremos más adelante. Respecto a la existencia de horario de trabajo, negamos rotundamente las aseveraciones que realiza la demandante en su libelo sobre el particular, ya que no existía horario de trabajo fijo, ni cumplimiento de jornada, ni mecanismo de control de la misma, ya que los cometidos pactados se organizaban de acuerdo a la oportunidad en que establecía la unidad que tenía a cargo la demandante tal como establecía el contrato.

En este punto cabe recordar que los contratos a honorarios establecían expresamente que los cometidos contratados se debían desempeñar en la oportunidad que para tal efecto establezca la unidad a cargo del programa (cláusula segunda), por tanto, está admitida expresamente la posibilidad de coordinar la oportunidad en el desempeño de los cometidos, lo que no debe entenderse como un indicio de otra vinculación contractual. Como se verá, los contratos suscritos entre la demandante y la Municipalidad de Talca eran de acuerdo a las necesidades propias del programa y la disponibilidad presupuestaria del municipio. En este punto cabe recordar que los contratos a honorarios establecían expresamente que los cometidos contratados se debían desempeñar en la oportunidad que para tal efecto establezca la municipalidad (cláusula tercera), por tanto, está admitida expresamente la posibilidad de coordinar el desempeño de los cometidos.

Finalmente, es importante sobre lo dicho tener presente la jurisprudencia de este mismo tribunal sobre la vinculación a honorarios: “la prestación de servicios sometida a las reglas del arrendamiento civil de servicios no es necesariamente incompatible con determinados derechos y obligaciones recíprocas dentro de la prestación de servicios, como la obligación del prestador de prestar los servicios dentro de determinado tiempo o en un determinado lugar o la obligación de seguir ciertas directrices de cómo hacer un determinado trabajo, donde realizarlo, o coordinar los horarios”.

Sobre el término del contrato a honorarios entre la demandante y la Municipalidad De Talca



Respecto al término del contrato de la demandante con la Municipalidad de Talca, se debe señalar que mediante acto de notificación personal se le comunica que el contrato de prestación de servicios sobre la base de honorarios, en marco del programa municipal denominado “Oficina de turismo”, no se renovará, atendido que los cometidos específicos que le fueron encomendados ya no serán requeridos de acuerdo a las necesidades propias del programa. En efecto, el contrato anterior regía hasta el 28 de febrero de 2022, por tanto, se le comunica la intención de no suscribir un nuevo contrato, lo cual fue aceptado por la demandante ya que solo cumplió cometidos específicos hasta dicha fecha y aquello lo confirma con la presentación de boleta de honorarios e informes de gestión firmados por aquel, dando cuenta de que aquellos solo se cumplieron hasta la mentada fecha. Negamos de forma expresa que la Municipalidad de Talca adeude honorario mensual de febrero de 2022 a doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos, ya que fue pagado íntegramente, tal cual se acreditará en la etapa procesal respectiva.

Entonces el término del contrato se debe netamente al vencimiento del plazo contenido en él y a que el municipio no contempló pactar un nuevo contrato a honorarios con la demandante por no ser requeridos los cometidos que le fueron encomendados. Por tanto, es absolutamente falso y negamos de forma categórica que el término de contrato de la demandante haya sido en los términos señalados por aquella en su demanda. No es efectivo que el término haya sido irregular o faltando a algún requisito legal. En conclusión, negamos todo lo señalado por la demandante sobre los motivos y la forma del término de su contrato a honorarios con el municipio. Su vinculación contractual no era indefinida, sino que se verifica por plazos de acuerdo a las necesidades propias del programa y la disponibilidad presupuestaria.

Sobre la naturaleza jurídica de la Corporación De Desarrollo de Talca

La demandante ha señalado y reconocido expresamente en su libelo, que ingresó a prestar servicios a la Corporación Municipal De Desarrollo con fecha septiembre de 2015 hasta enero de 2020 mediante contrato de trabajo, el cual finalizó por mutuo acuerdo de las partes y reconoce expresamente haber firmado finiquito ante notario. Pues bien, sobre el particular hay que dejar claro unos puntos válidos:



a) La Municipalidad de Talca es una persona jurídica completamente distinta de la Corporación Municipal de Desarrollo.

b) La Municipalidad de Talca tiene como RUT el N° 69.110400-1, mientras la Corporación Municipal de Desarrollo tiene como RUT el N° 65.067.622-k, lo que puede comprobarse fácilmente al hacer una consulta de situación tributaria de terceros en la página del Servicio de Impuestos Internos.

c) Mientras la Municipalidad de Talca se rige por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695, la Corporación de Desarrollo tiene sus propios estatutos.

d) La Corporación Municipal de Desarrollo Comunal es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se rige por las normas del título XXXIII del libro I del Código Civil.

e) La Municipalidad solo puede proceder a la contratación bajo las normas del Código del Trabajo en los casos del artículo 3 de la Ley 18.883, que establece el estatuto administrativo para funcionarios municipales, la

Corporación de Desarrollo, al ser una persona jurídica de derecho privado, puede utilizar libremente los mecanismos legales de contratación.

f) De tal forma que no es efectivo que la Corporación Municipal de Desarrollo sea dependiente de la Municipalidad de Talca. En efecto, si se consulta la orgánica interna y la planta municipal, en ningún lugar figura la Corporación Municipal de Desarrollo, ya que es un ente autónomo e independiente.

En ese orden de ideas y para aclarar la situación contractual de doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos, se ha solicitado información mediante buenos oficios, a la citada Corporación, quien ha comunicado que efectivamente la demandante tuvo una vinculación con aquella, la cual expiró con fecha 31 de enero de 2020 por la causal contemplada y prevista en el artículo 159 N° 1 del Código del Trabajo, eso es, “mutuo acuerdo de las partes”, firmándose finiquito ante notario público de la ciudad de Talca en el que las partes se otorgaron, sin que se hicieran reserva alguna de derechos, cuestión que intentaremos acreditar en la etapa procesal respectiva.



De tal forma, a la Municipalidad de Talca le es inoponible cualquier alegación respecto las relaciones contractuales que hubiere tenido la demandante con fecha anterior al 01 de febrero de 2020, ya que dicha oportunidad es la que marca el inicio de su relación a honorarios con la Municipalidad de Talca. No es efectivo que se la haya dicho o prometido a la demandante que se le contrataría bajo las normas del Código del Trabajo por parte de la Municipalidad de Talca, ya que dicha posibilidad está legalmente restringida y por cuanto los cometidos específicos quedan cubiertos perfectamente bajo el vínculo a honorarios al ser de carácter puntual, determinados y concretos, y además porque la actividad de difusión de turismo no forma parte de las tareas privativas y esenciales de las municipalidades, sino que son más bien de aquellas de carácter facultativas y potestativas.

De igual forma la demandante mientras estuvo vinculada para la Municipalidad de Talca nunca desarrolló sus cometidos en espacios físicos que hayan sido de administración de la Corporación de Desarrollo, ya que esta última es totalmente independiente de mi representada. Los cometidos desempeñados por la demandante no forman parte de las funciones esenciales, habituales y privativas de las municipalidades. El artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala expresamente las funciones privativas de estos servicios, no advirtiéndose en ninguno de sus numerales que los cometidos que desempeñaba la denunciante fueran considerados como funciones habituales, esenciales y atributivas de la Municipalidad de Talca. En efecto, como ya se ha dicho, la demandante cumplió cometidos en el contexto de un programa denominado “Oficina de turismo” para efectos de difundir y promover información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro, información oferta turística a la comuna y apoyar en los proyectos de programas de la oficina de turismo. Dicho programa se articula desde la Oficina de Turismo, la cual es una unidad creada por el municipio centrada en una actividad potestativa no esencial, sin que la ley ordene imperativamente su creación, ya que se trata de una función facultativa de la Municipalidad.

Los cometidos de la demandante se encuadran más bien en aquellas funciones que las Municipalidades pueden asumir potestativamente, es decir, que pueden o no hacerse. En este punto resulta importante lo que señala el artículo 4 de la citada ley, el que permite que las



municipalidades, en el ámbito de su territorio, puedan desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con el turismo, la capacitación, la promoción del empleo, el fomento productivo y la recreación. Como se advierte, los cometidos encomendados a la actora no son tareas habituales de los municipios, sino más bien funciones que son posibles de realizar, pero no de manera atributiva e imperativa. Lo anterior, se desprende de la expresión utilizada por la propia norma al señalar que las Municipalidades “podrán desarrollar”.

En conclusión, los cometidos para los que fue contratada la demandante, y que dicen relación con la promoción de turismo, dependiente de la Municipalidad de Talca, no dice relación con las funciones específicas y privativas de las municipalidades.

Argumentos de derecho

El Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, Ley 18.883 establece en su artículo 1º: “El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades. A los alcaldes sólo les serán aplicables las normas relativas a los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos”. Seguidamente el artículo 3º, del mismo cuerpo legal prescribe que: “Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación. El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se registrará también por las normas del Código del Trabajo”. Del análisis de la norma transcrita, vemos que la posibilidad que los municipios suscriban contratos de trabajo se encuentra limitada a aquellos en casos en que la propia ley detallada, no pudiendo extenderse a aquellas situaciones no contempladas atendiendo a la máxima de que en derecho público solo se puede realizar aquello que está expresamente permitido.

Como podrá apreciar SS., la parte demandante no se encontraba en los casos regulados por el artículo 3 del Estatuto para Funcionarios



Municipales, respecto de su contratación a honorarios, por lo tanto, no cabe aplicar a su respecto las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo respecto de dicha vinculación. Continuando con el análisis normativo, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales dispone en el artículo 4° que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse laborales accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. ”

Por su parte, el Código del Trabajo en su artículo 1, nos señala que: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre de dichos funcionarios o trabajadores se encuentran sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código”.

Del análisis de las normas transcritas, podemos concluir que las Municipalidades pueden celebrar contratos para realizar las diversas funciones que le competen de forma exclusiva o que no correspondiéndole privativamente asume en razón del bienestar de la comunidad, bajo las siguientes modalidades: Cargos de planta, Empleos a contrata, Contratación a honorarios, y excepcionalmente, contrato de trabajo.



La contratación a honorarios, es aquella que se define como la convención en virtud de la cual una parte se encuentra obligada a prestar servicios específicos, por un tiempo determinado a favor de otro, el que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios y se rige por las reglas relativas al arrendamiento de servicios inmateriales, artículo 2006 y siguientes del Código Civil Chileno.

Conforme a lo expuesto, en el caso concreto de autos, no es efectivo, negamos y controvertimos expresamente, que la demandante estuviera vinculada por un contrato de trabajo. De tal forma, cuando la Municipalidad de Talca y la parte demandante celebraron el contrato sobre la base de honorarios, se someten a las disposiciones contenidas en el mismo y en lo no regulado, según lo dispuesto en las normas generales, no siendo aplicable ni siquiera el Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales ni con menor razón el Código del Trabajo. Como corolario, la demandante ha errado en el ejercicio de sus derechos, por entablar incorrectamente su demanda, en lo que respecta a su contratación a honorarios, ya que al ser de naturaleza civil el vínculo contractual que regía a las partes, se aplican a su respecto las normas pactadas por los contratantes y en consecuencia por las normas del derecho civil, resultando ser otro el tribunal llamado a resolver cualquier discrepancia contractual que pueda existir en la práctica.

Es más, durante la relación contractual, la demandante manifestó plena conformidad con ella, suscribiendo los contratos a honorarios mensualmente, emitiendo las correspondientes boletas de honorarios mes a mes y realizando la declaración de renta.

Por las razones esgrimidas, la demanda no puede ser acogida en los términos expuestos, porque confunde las modalidades de contratación del municipio y pretende ejercer una acción, que en el ámbito de la relación a honorarios no le corresponde. Que, al no existir contrato de trabajo entre las partes, tampoco tuvo lugar el “despido injustificado” reclamado, dada la naturaleza jurídica de la relación contractual de las partes en juicio.

De las indemnizaciones, montos y conceptos demandados

Atendida la inexistencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo entre las partes de este litigio, corresponde el rechazo



íntegro de la demanda, así como también de todos los conceptos y montos allí requeridos, manifestando expresamente que la Municipalidad de Talca niega adeudar algún concepto a doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecinos. En consecuencia, se declara que:

- No existe obligación de pago de cotizaciones de seguridad social, de salud, previsión y de cesantía de la demandante. No procede en atención a la relación estrictamente civil que se tuvo con aquella. Sin perjuicio de ello, cabe alegar que en el improbable evento que la demanda sea acogida, el pago reclamado en ese sentido no corresponde en los términos planteados ya que si se acepta la teoría expuesta en la demanda ha de estimarse que la totalidad percibida por la demandante constituyó una remuneración íntegramente percibida de tal forma que al ordenar el pago de cotizaciones sobre tal remuneración constituye enriquecimiento injusto y un aumento ilícito de las remuneraciones por medio de una eventual sentencia judicial a lo que desde luego nos oponemos. Además, como cotizante independiente la demandante debe pagar sus cotizaciones con los impuestos retenidos mensualmente por el SII a contar del año 2018 como se dijo previamente.
- No existe obligación de pagar indemnización sustitutiva de aviso previo a la demandante en atención a la relación civil que existió.
- No existe obligación de pagar a la demandante indemnización por años de servicio, dado que las partes se encontraban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios a honorarios los que no contemplaban tal posibilidad.
- No existe obligación de pagar el incremento del 50% de los años de servicio que señala la demandante, en atención a la relación civil que existió entre aquella y la Municipalidad de Talca.
- No existe obligación de pago de feriado legal y proporcional, atendida la naturaleza contractual civil de la relación entre la Municipalidad de Talca y la demandante. Por tanto, negamos expresamente que se adeude este concepto, puesto que nunca ha existido obligación en tal sentido.
- No procede aplicar la sanción de nulidad de despido ni el pago de remuneraciones posteriores al término de la relación contractual atendida la naturaleza civil de la relación contractual de las partes del



juicio, y por la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Sobre improcedencia de cotizaciones previsionales y la nulidad del despido.

La demandante también ejerce la acción de nulidad del despido en contra de mi representada. Por otro lado, a lo largo de esta presentación, esta parte ha explicado a este Tribunal, que la pretendida relación laboral jamás existió, puesto que la facultad legal para contratar a la demandante proviene del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, Ley N° 18.883, que permite la contratación bajo las normas civiles, de prestadores a honorarios para el desempeño de cometidos específicos en el contexto de un programa determinado, como ha ocurrido en la especie. Dicho lo anterior, y reiterando la idea de que la relación entre las partes de este juicio es netamente civil, y ajena a la aplicación de las normas del Código del Trabajo, aun no resultaría aplicable la sanción de nulidad del despido en el caso improbable que el actor obtuviera un fallo favorable, toda vez que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha unificado en el sentido de establecer que no procede nulidad del despido en relación laboral reconocida judicialmente. En efecto nuestro máximo tribunal de justicia ha determinado que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado, como lo son los municipios, y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, como acontece en el presente caso a raíz de lo dispuesto en la Ley 18.883.

Para un mejor análisis citamos algunos fallos en los que se contiene tal conclusión:

❖ Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de fecha 07 de mayo de 2018, Rol Cote N° 41.500 de 2017:

“Cuarto: Que, como se observa, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de la materia de derecho debatida, la que incluso, ya ha sido conocida por esta corte y unificada en el sentido propuesto por los fallos de contraste.



Sin embargo, y después de un nuevo estudio, esta corte ha decidido modificar su postura doctrinal sobre el tema, específicamente en el caso en que el empleador respecto del cual se reclama el pago de la sanción en comento, corresponde a un órgano público que procedió a una contratación de prestación de servicios a honorarios, amparado en una norma legal que lo autoriza, siendo declarada la existencia de la relación laboral, en el fallo de instancia.

Quinto: Que siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa.-siendo impropio y jurídicamente errado asignarle, como lo hace la decisión impugnada, un carácter constitutivo según la condición pública del sujeto contratante, pues tal cuestión no depende de la naturaleza jurídica que ostentan las partes, sino del contenido del pronunciamiento judicial-, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base.

Sin embargo como se insinuó, con un mejor estudio de los antecedentes, este tribunal considera pertinente modificar su postura en relación a este punto, cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la administración del estadio - entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues a juicio de esta corte concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del código del trabajo.

Sexto Que, por otro lado, la aplicación - en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del estados no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieran, por regla general, el



pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la administración del estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor”.

❖ Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de marzo de 2018, Rol Cote N° 36.601 de 2017:

“10. Que, como se advierte, regulan la situación que se configura porque el empleador al momento de la desvinculación del dependiente se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones previsionales, cuyos montos descontó y retuvo de las remuneraciones respectivas sin enterarlos en los organismos pertinentes, no aquella que se presenta cuando una sentencia establece que las partes estaban vinculadas laboralmente, por lo tanto, la procedencia de aplicación de la sanción de invalidez del despido debe determinarse a la luz de la finalidad que tuvo el legislador al instaurarla, que es precisamente estimular al empleador a enterar en los órganos respectivos las cotizaciones que retuvo, sin que sea necesaria la intervención de la autoridad administrativa o judicial, ergo, supone que esa obligación de retención es manifiesta para las partes.

11° Que, sin embargo, como dicha obligación no resulta patente para un litigante que desconoce la existencia de la relación laboral, controversia que solo fue dirimida en la sentencia que se impugna, aplicar la sanción d la nulidad del despido en eses caso importa extender la finalidad de la norma más allá de lo querido por el legislador, con ello, obligar al empleador a asumir una actitud que de buena fe estima que no le es exigible, por ley ni por contrato, lo que también entendió el trabajador, según denota su actitud conforme durante toda la vigencia de la relación laboral;

12° Que, por lo tanto, se debe concluir que el reproche a que se hace referencia solo fue previsto para el empleador que efectuó la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no enteró los fondos en el órgano respectivo, es decir, no cumple su rol de



agente intermediario y distrae dineros que no le pertenecen en fines distintos a aquellos para los que fueron retenidos, cuyo no es el caso, porque la demandada desconoció que el vínculo que lo una al demandante era laboral, polémica que se dilucidó en la sentencia refutada, de modo que no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social y, por ende, no procede decretar la nulidad del despido prevista en la norma transcrita; ”.

Por otro lado, en el improbable evento que el tribunal de S.S. declare la existencia de la relación laboral de las partes, alegamos el efecto constitutivo y no declarativo de la sentencia, si eventualmente se reconoce dicha circunstancia.

En efecto, la certeza de lo que procesalmente pueda entenderse la verdadera vinculación laboral entre las partes, emana del eventual fallo que se dicte en estos autos por lo cual no es posible acoger la acción del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, pues el pago de las remuneraciones hasta la acreditación del integro implica una verdadera sanción aplicada de forma retroactiva. Es así como la Corte Suprema ha podido establecer que no puede aplicarse la sanción de nulidad del despido por falta de pago de cotizaciones previsionales en aquellos casos en que no existía empleador ni “trabajador”, por cuanto los efectos propios del contrato de trabajo presunto surgen solamente de la sentencia que no solo declara una certeza, sino que constituye sus efectos a partir de tal declaración, y la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo debe aplicarse únicamente a la persona que ha asumido el rol de empleador, el cual solo se asume a partir de la sentencia que declara la existencia de un vínculo laboral y no antes. Desde la perspectiva objetiva y del respeto recíproco de las partes contratantes vinculadas por contratos de honorarios, no podemos sino concluir un rechazo absoluto a las pretensiones del hoy demandante laboral y ayer contratante civil que, invocando calidades diferentes a las contratadas en un inicio, pretende adjudicarse más derechos de los que le correspondía en razón de la contratación inicial.

De esta forma, y frente a una hipotética sentencia que reconoce la relación laboral, no puede, ni debe entenderse que el empleador estaba obligado a pagar cotizaciones previsionales y/o que el “trabajador” tenía derecho a estas mismas, por lo que mal podría el empleador haber infringido sus obligaciones de descontar y retener las cotizaciones previsionales.



En resumen, si bien la obligación del pago de las cotizaciones previsionales nace desde la existencia misma del contrato de trabajo y se mantiene durante toda su vigencia, no es de justicia exigir el pago de las mismas al empleador, cuya buena fe se presume, en la época que ignoraba la presencia de dichas obligaciones, encontrándose, por ende, imposibilitado de cumplirlas por desconocimiento de ellas, en razón a lo que se hace inaplicable la sanción establecida en el artículo 162 inciso 7° del Código del Trabajo, únicamente en el período que el empleador desconocía el contrato y a diferencia de ello, cuando existe la certeza que refleja una sentencia ejecutoriada que produce cosa juzgada, en relación a la existencia del contrato de trabajo.

Respecto del beneficio económico que recibe “el prestador” al percibir su “remuneración” en forma íntegra, sin que se le hayan realizado los descuentos legales hay que señalar que la obligación de descontar y enterar cotizaciones previsionales solo puede tener lugar en los casos en que la relación laboral no se encuentra discutida; (pues) la sentencia judicial que la reconoce como tal no puede tener un efecto retroactivo como para estimar que la persona declarada como empleadora se encontraba obligada a retener y enterar las cotizaciones, prestaciones que son de cargo del “trabajador”, y en estas condiciones éste ha percibido la totalidad de sus emolumentos, sin descuentos, beneficiándose económicamente. Lo que se acreditará oportunamente.

Cómo se puede apreciar existe una evidente diferencia entre los montos correspondientes al 10% retenido de impuestos y el total de imposiciones que siempre fue pagado a la demandante, quien los percibió íntegramente. En el hipotético evento de ser considerados “empleadores” no es posible estimar que como tales nos quedamos con los dineros correspondientes a cotizaciones e imposiciones cuando todo indica que fue el propio demandante la que los percibió y en consecuencia ello debe tenerse presente sea para efectos de rechazar la demanda, sea, en subsidio, para aplicar compensatoriamente tales fondos a los montos que la demanda eventualmente declare a favor del actor.

La lógica de lo que señalamos se entiende si analizamos el pago que realiza el receptor de los servicios por estos. En una relación regida en virtud de un contrato a honorarios, como es el caso de autos, el prestador de servicios (en este caso la demandante) ha recibido un



estipendio íntegro que no sufre descuento alguno precisamente por no encontrarse regido por las normas laborales. Si esta relación estuviera regida por un contrato de trabajo, tales emolumentos serían menores debido a que en este tipo de relaciones el empleador se ve obligado a realizar los descuentos previsionales que son de cargo del “trabajador”, sin nombrar los descuentos de carácter tributario. De esta forma, condenar al empleador a pagar cotizaciones previsionales supuestamente devengadas durante el tiempo en que el “trabajador” prestó servicios a honorarios sería ordenar un pago doble y sin razón jurídica alguna, debido a que el monto de tales cotizaciones estaría incluido en las remuneraciones íntegras ya pagadas al “trabajador”, solo que no fueron retenidos por el empleador.

El enriquecimiento sin causa va de la mano con la buena fe de las partes contratantes que hemos alegado y de justicia patrimonial que no hace más que sustentar la improcedencia jurídica de la sanción del artículo 162 a las relaciones laborales como la que se presenta en estos autos.

Por ello insistimos en la petición subsidiaria al rechazo de la demanda, que se entienda que lo que eventualmente podría corresponder a las cotizaciones de AFP, salud y AFC, fue en su momento percibido por la parte demandante como renta líquida y en el evento de una sentencia condenatoria debe ser imputado a los montos que la sentencia declare en su favor. Más aún si se considera que los fondos retenidos a título de impuesto a la renta (10% PPM) pudieron incluso habersele restituido a la demandante como producto de devolución de impuesto lo que intentaremos acreditar en autos.

Así las cosas no resulta aplicable al caso de autos la disposición del artículo 162 del mismo cuerpo de normas, ya que, en primer término no existe relación regida por el código del trabajo, y seguidamente en razón de que dicha sanción ha sido prevista solamente para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente a las remuneraciones del “trabajador” y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no ha cumplido con su rol de agente intermediario y ha distraído dinero que no le pertenece, en finalidades distintas para las cuales fueron dispuestos, lo que estima no ha sucedido en la especie, ya que la mencionada retención no se produjo por entender las partes que su vínculo era de naturaleza civil.



Que, en este caso, desconocemos expresamente el hecho que haya existido entre esta parte y la parte demandante un contrato de trabajo por el periodo indicado en la demanda, sino una prestación de servicios de carácter civil de modo que durante tal periodo malamente pudo existir retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido prevista por la norma antes citada.

De la prescripción

Por último, para el evento improbable que S.S., no acoja la excepciones, alegaciones y defensas de fondo planteadas en esta presentación y por el contrario estime que existió una relación laboral sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, lo cual reitero, desconocemos rotundamente, se opone también en subsidio de lo anterior, la excepción de prescripción de los eventuales derechos que se declaren conforme dispone el artículo 510 del Código del Trabajo, que establece en lo pertinente, que: “Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Se realizaron las audiencias previstas en los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Hechos objeto de la prueba. Que en la audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación proponiendo las bases de un posible acuerdo el cual no prosperó y se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

(1.) Funciones cumplidas por la parte demandante y conforme los contrato celebrados con la parte demandada en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020

(2.) Funciones cumplidas por la parte demandante y conforme los contrato celebrados con la parte demandada en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2021

(3.) Funciones cumplidas por la parte demandante en razón de los contrato celebrados con la parte demandada en el periodo comprendido entre enero a febrero de 2022



(4.) Si las funciones cumplidas por la parte demandante eran ejecutadas y virtud de órdenes y directrices impartidas por la parte demandada, y si éstas eran fiscalizadas en cuanto a su cumplimiento y modo de ejecución por la parte demandada

(5.) Si la parte demandante debía rendir cuenta de las funciones encomendadas, si tenía obligación de asistencia diaria y

(6.) Si la parte demandante hizo uso de feriado legal correspondiente al periodo trabajado, y en el evento contrario, si la parte demandada, al término del último contrato celebrado, pagó alguna indemnización compensatoria al igual que la correspondiente a un eventual devengo de feriado proporcional.

(7.) Causa del término del último contrato celebrado entre las partes litigantes.

SEGUNDO: Reseña de los medios de prueba incorporados. Que en la audiencia de juicio las partes litigantes incorporaron las pruebas que se indican a continuación:

Los de la parte demandante.

I.- Documental:

1.- Set de 25 boletas de honorarios, todas emitidas por la demandante doña Soledad Cristina Peña y Lillo y recepcionadas por la I. Municipalidad de Talca, todas correlativas desde el mes de febrero de 2020 hasta el mes de febrero de 2022.

2.- Comunicación de término de contrato de fecha 24 de febrero de 2022, remitido por la Ilustre Municipalidad de Talca a la demandante, que informa que a partir del 01 de marzo no se renueva el contrato.

II.- Exhibición de Instrumentos: Incorporó los documentos que le fueron presentados por la parte demandada consistentes en a) Totalidad de contratos de prestación de servicios, celebrados entre la I. Municipalidad de Talca y, doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos entre el mes febrero de 2020 hasta el mes de febrero de 2022, b) Copia de los decretos alcaldicios que visaron los contratos de honorarios, celebrados entre la demandante doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos y la I. Municipalidad de Talca, entre febrero de 2022 hasta el mes de febrero de 2022 c) Copia del control de registro



de índices, de gestión o de informes de gestión de los programas en que prestaba servicios la demandante, doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos y que esta debía entregar conjuntamente con la boleta de prestación de servicios a la demandada, la I. Municipalidad de Talca, y que dan cuenta del horario, programación y tareas asignadas al demandante y remita copia de esos registros. Dichos documentos son parte de la prueba documental de la parte demandada (folios N° 23, 24, 25, 30, 31 y 32). El tribunal tiene por cumplida la prueba de exhibición de documentos.

III.- Absolución de posiciones: Provocó la confesión de la parte demandada, quien a través de su mandatario especial don Ariel Gonzalo Amigo Vidal, C.I. N°15.633.578-9 de profesión abogado y Administrador municipal absolvió las posiciones formuladas por la defensa de la parte demandante.

IV.- Testimonial: Comparecieron don Diego Hernán Zúñiga Canales, C.I. N° 18.064.228-5, Técnico en Turismo y doña Ana María Aravena Valdés, C.I. N° 12.037.883-k, administrativa, quienes previa las formalidades legales declararon al tenor de las preguntas y contra preguntas formuladas por la defensa de las partes.

Los de la parte demandada.

I.- Documental:

1. Copia de los siguientes decretos alcaldicios siaper de la Ilustre Municipalidad de Talca, que dispusieron la contratación de prestación de servicios a honorarios de doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino N°s 2453 de 2020. 5382 de 2020. 6203 de 2020. 871 de 2022. 1834 de 2021. 2168 de 2021. 3167 de 2021. Y 4594 de 2021.

2. Copia de 08 Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios, celebrados entre la Ilustre Municipalidad de Talca y doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino por el periodo comprendido entre febrero de 2020 y hasta febrero de 2022.

3. Copia de Acta de Notificación de fecha 24 de febrero de 2022 mediante la cual la Municipalidad de Talca, a través del Administrador Municipal deja constancia de la diligencia y comunica notificación del término del contrato a honorarios de doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino.



4. Copia de resumen anual de honorarios pagados por la Municipalidad de Talca a doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 en el programa oficina de Turismo, expedidos por el Departamento de Remuneraciones de la Dirección de Administración y Finanzas.

5. Copias de Boletas de Honorarios Electrónicas del Servicio de Impuestos Internos, emitidas por Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino a la Ilustre Municipalidad de Talca, todas con el respectivo informe de gestión suscrito por la demandante y que va adjunto a cada boleta correspondiente a las siguientes: a) De la n° 55 a la n° 65 todas de 2020. b) De la n° 66 a la n° 75, 77 y 78 todas de 2021 y c) De la n° 79 a la n° 80 de 2022.

6. Copias de informes de gestión mensual suscritos por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino para efectos del pago de honorarios y adjuntos a cada boleta de honorarios, correspondientes a los siguientes meses: a) De febrero a diciembre de 2020. b) De enero a diciembre de 2021. c) De enero a febrero de 2022.

II.- Exhibición de Instrumentos: Incorporó documentos que le fueron presentados por la parte demandante consistentes en Boletas de honorarios emitidas por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino desde febrero de 2020 hasta febrero de 2022, desde la número 55 a la 80 y Declaraciones de impuesto a la renta realizadas por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino, RUT 15.907.841-8 en el Servicio de Impuestos Internos, correspondientes a los años tributarios 2020, 2021 y 2022.

TERCERO: Determinación de los hechos de la causa. Que ponderándose la prueba incorporada en autos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando para ello especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las utilizadas permitieron tener por acreditados los hechos siguientes:

(1). Que en el período comprendido entre el mes de enero a diciembre del año 2020, la demandante doña Soledad Peña y Lillo Montecinos cumplió en el marco del programa Oficina de Turismo las funciones de difundir información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro sobre información oferta turística de la comuna, apoyar programas de



turismo, difundir los atractivos turísticos y socioculturales, ofrecer información y orientación turística a la comunidad.

(2.) Que en el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre del año 2021, la misma demandante cumplió en el marco del programa Microempresa las funciones de colaborar en la elaboración, difusión, ejecución de acciones para el fomento productivo y el emprendimiento.

(3.) Que en el periodo comprendido entre el mes de enero a febrero del año 2022, la demandante cumplió dentro de marco del programa Oficina de Turismo las funciones de difundir y promover la información turística a la comunidad, prestar apoyo logístico en las actividades de turismo, realizar catastro, información oferta turística a la comuna y apoyar en los proyectos de la oficina de turismo.

(4.) Que los programas precisados fueron implementados por la Unidad de Desarrollo Económico de la Corporación Municipal de Desarrollo Económico.

(5.) Que durante el periodo de tiempo antes precisado, el demandante y la municipalidad demandada suscribieron contratos de prestación de servicios a honorarios en todos los cuales se precisaban las funciones a desempeñar por el demandante, una suma de dinero determinada que se le pagaba por la prestación de sus servicios con la retención legal correspondiente pagada por periodos vencidos contra la presentación de boletas de honorarios respaldadas por informes de gestión mensuales firmados en los cuales debía dar cuenta de los servicios generados y el cumplimiento de los cometidos ejecutados durante los respectivos periodos mensuales, siendo éstos firmados y visados por el o la encargada de la Unidad de Desarrollo Económico o quien lo subrogara.

(6.) Que todos los contratos celebrados por las partes litigantes, se suscribieron a plazo fijo con precisión claramente determinada de la fecha de término de cada uno de ellos, y con facultades reservadas para cada parte contratante de poner término anticipado a ellos, sin



expresión de causa, y sí la facultad la hacía valer la municipalidad demandada debía comunicar por escrito al demandante y dejar constancia de esta diligencia por el funcionario que la practicara y en el evento de finalizar el contrato antes del mes la cuota mensual del honorario se rebajaría proporcionalmente pagándose lo que correspondía al estado de avance de los cometidos de acuerdo a los informes de gestión emitidos por el actor y la dirección o unidad con la cual se coordinaba el cumplimiento de los mismos y en el evento de poner término anticipado el demandante éste debía dar aviso escrito con diez días de anticipación y por escrito.

(7.) Que en todos los contratos suscritos por ambas partes litigantes, la municipalidad se reservaba discrecionalmente la facultad de otorgar aguinaldos de fiestas patrias y de navidad dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y en la medida de que la naturaleza de los servicios lo ameritare se proporcionaría a la demandante implementos para desempeñar las funciones los que en caso de que efectivamente se los hubiere entregado debía restituirlos al termino del contrato

(8.) Que las funciones asignadas al demandante las debía cumplir en las oportunidades que estableciera el encargado de la Oficina de Turismo.

(9.) Que con fecha 24 de febrero del presente año 2022 la municipalidad demandada comunicó por escrito a la demandante del término del último contrato suscrito por un periodo de vigencia desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero del año en curso, atendido que los cometidos que le fueron encomendados ya no eran requeridos de acuerdo a las necesidades propias del programa Oficina de Turismo.

Que los hechos establecidos se acreditaron con el mérito múltiple, grave, preciso y concordante de la prueba documental consistente en Set de 25 boletas de honorarios, todas emitidas por la demandante doña Soledad Cristina Peña y Lillo y recepcionadas por la I. Municipalidad de Talca, todas correlativas desde el mes de febrero de 2020 hasta el mes de febrero de 2022; comunicación de término de



contrato de fecha 24 de febrero de 2022, contratos de prestación de servicios, celebrados entre la I. Municipalidad de Talca y, doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos entre el mes febrero de 2020 hasta el mes de febrero de 2022, copia de los decretos alcaldicios que visaron los contratos de honorarios, celebrados entre la demandante doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos y la I. Municipalidad de Talca, entre febrero de 2022 hasta el mes de febrero de 2022, copia de gestión o de informes de gestión de los programas en que prestaba servicios la demandante, doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos y que esta debía entregar conjuntamente con la boleta de prestación de servicios a la demandada, la I. Municipalidad de Talca, y que dan cuenta del horario, programación y tareas asignadas al demandante y remita copia de esos registros. Dichos documentos son parte de la prueba documental de la parte demandada (folios N° 23, 24, 25, 30, 31 y 32). copia de los decretos alcaldicios siaper de la Ilustre Municipalidad de Talca, que dispusieron la contratación de prestación de servicios a honorarios de doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino N°s 2453 de 2020. 5382 de 2020. 6203 de 2020. 871 de 2022. 1834 de 2021. 2168 de 2021. 3167 de 2021. Y 4594 de 2021, copia de 08 Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios, celebrados entre la Ilustre Municipalidad de Talca y doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino por el periodo comprendido entre febrero de 2020 y hasta febrero de 2022, copia de resumen anual de honorarios pagados por la Municipalidad de Talca a doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 en el programa oficina de Turismo, expedidos por el Departamento de Remuneraciones de la Dirección de Administración y Finanzas, copias de Boletas de Honorarios Electrónicas del Servicio de Impuestos Internos, emitidas por Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino a la Ilustre Municipalidad de Talca, todas con el respectivo informe de gestión suscrito por la demandante y que va adjunto a cada boleta correspondiente a las siguientes: a) De la n° 55 a la n° 65 todas de 2020. b) De la n° 66 a la n° 75, 77 y 78 todas de 2021 y c) De la n° 79 a la n° 80 de 2022, copias de informes de gestión mensual suscritos por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino para



TKRXXCJZEJR

efectos del pago de honorarios y adjuntos a cada boleta de honorarios, correspondientes a los siguientes meses: a) De febrero a diciembre de 2020. b) De enero a diciembre de 2021. c) De enero a febrero de 2022 y con el mérito de la exhibición de los documentos consistentes en Boletas de honorarios emitidas por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino desde febrero de 2020 hasta febrero de 2022, desde la número 55 a la 80 y Declaraciones de impuesto a la renta realizadas por doña Soledad Cristina Peña Y Lillo Montecino, RUT 15.907.841-8 en el Servicio de Impuestos Internos, correspondientes a los años tributarios 2020, 2021 y 2022.

CUARTO: Análisis de la cuestión sustantiva controvertida. Calificación de la relación contractual que vinculó a las partes litigantes. Que al respecto y de modo sucinto, cabe precisar que en este juicio se ejercitó por la parte demandante la acción de impugnación el despido, sanción de nulidad por no pago de cotizaciones previsionales y la cobro de prestaciones laborales y previsionales sustentadas todas ellas, en la existencia de una relación contractual de naturaleza laboral, vigente por el periodo comprendido entre 1° de febrero del año 2020 hasta el 28 de febrero del presente año 2022. La precisión referida, surge necesariamente como consecuencia de la negación directa sostenida por la parte demandada en su escrito de contestación al controvertir de modo expreso la naturaleza laboral que la contraria atribuye a la relación contractual que las vinculó por el espacio de tiempo antes indicado, la cual, es calificada por su parte, como una de carácter civil.

Que centrada la cuestión sustantiva controvertida por las partes, esto es, la real naturaleza jurídica de la relación contractual que vinculó a las partes litigantes y por ende el estatuto jurídico que le resultaba aplicable, surge el deber de dilucidarla previamente, puesto que ella incide directamente en la procedencia de las acciones ejercidas por la parte demandante en esta sede judicial laboral.

QUINTO: Que con el objeto establecido precedentemente, resulta necesario, en primer término analizar como cuestión crucial el ámbito



de aplicación del Código del Trabajo el cual parte fijándola en su artículo 1° disponiendo que: "Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este código y por sus leyes complementarias". "Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial". "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueran contrarias a estos últimos".

"Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código".

El citado artículo contempla la regla general en su inciso primero, en orden a que el Código del Trabajo es aplicable a todas las relaciones laborales en las que concurren los supuestos legales definidos en su artículo 7°; y contempla además, una excepción y una contra excepción, en virtud de la primera, queda excluida su aplicación respecto de los trabajadores definidos en su inciso segundo siempre que dichos trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, la contra excepción comprende a los mismos trabajadores de los órganos allí reseñados quienes vuelven a quedar regidos por el Código del Trabajo sólo en aquellas materias no expresamente reguladas por sus estatutos especiales y siempre que no fueren contrarias a estas últimos.

Que en segundo término, cabe referirse a la Ley N°18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado la que en su artículo 12 dispone que: " El personal de la administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes, los derechos, la responsabilidad administrativa y cesación de funciones",



en relación a la norma legal citada, atendiendo la naturaleza de la parte demandada de ser un órgano de la administración descentralizada del Estado, el estatuto específico que regula las relaciones entre el personal que presta servicios en ella, es la Ley N°18.883 denominado Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en que en su artículo 1° fija su competencia en los términos que indica: “ El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades. A los alcaldes solo le serán aplicables las normas relativas a los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos”. Por otra parte, la propia Ley N°18.883 circunscribe el ámbito de aplicación del Código del Trabajo en los casos previstos en su artículo 3° disponiendo al efecto que:” Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación. El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá también por las normas del Código del Trabajo”.

SEXTO: Que con lo relacionado a la normativa legal en convergencia, cabe tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual, que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica, constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato, sin perjuicio de lo cual el establecimiento de jornadas laborales, la existencia de supervisión sobre las labores que se ejecutan y los derechos y beneficios que dan



cuenta de los contratos suscritos entre las partes litigantes, no son indicativos por sí mismos de la existencia de una relación laboral, es decir, los elementos anotados no son tan solo privativos de una relación regulada por el Código del Trabajo, sino que aquellos también derivan del ejercicio del principio de la libertad de contratación.

Y en segundo término, cabe asentar que la ejecución de los servicios en situación de subordinación y dependencia implica, como sabido una manifestación del poder de dirección del empleador, pues tiene éste la facultad de organizar el trabajo de manera tal que realmente se cumpla con las actividades y en segundo término contiene el deber de respeto y obediencia del trabajador frente a las instrucciones que en el desarrollo de su cometido le fueren impartidas debiendo fidelidad y lealtad al empleador quedando en situación de dependencia técnica o administrativa respecto de éste, y por otra parte es dable poner de relieve, que para presumir la existencia de un contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Código del Trabajo es necesario que concurren en la práctica todos y cada uno de los elementos que definen a dicho contrato según su definición legal contenida en el artículo 7° del citado código.

SÉPTIMO: Que precisado lo anteriormente expuesto, cabe señalar que de conformidad con el mérito de los hechos acreditados en la causa y reseñados en el fundamento tercero de la sentencia, se evidencia que en el período comprendido entre febrero del año 2020 a febrero de 2022 la demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico, relacionado con tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas en los números 1) , 2) y 3) del fundamento tercero de la sentencia y con determinación del tiempo de vigencia de las mismas, que las mismas fueron ejecutadas por la actora de modo autónomo sin instrucciones determinadas por la parte demandada en cuanto a la forma y tiempo de desempeñarlas, sin supervisión sobre los servicios encomendados, sin la obligación de asistencia diaria con marcación de reloj control u otro mecanismo registral y sin la fiscalización diaria respecto a la oportunidad ni forma de desarrollarlas.



Que en lo que respecta a las alegaciones del demandante de la existencia de supervisión y de control de parte de la demandada, al exigírsele emisión de informes de gestión como contrapartida del pago de sus servicios, cabe recordar que de conformidad con la normativa de carácter administrativa y de orden público disponen el control sobre el uso de recursos del Estado, tal cual así lo dispone el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado “ Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones” y en relación a la materia esta la disposición del artículo 10° que expresa: “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.” Y por otra parte, se comprueba que las funciones desempeñadas por la demandante lo fueron dentro del marco de un programa Oficina de Turismo el que fue implementado conforme a sus funciones facultativas que al efecto les dispensa la norma contenida en el artículo 4° letra g) de la Ley N°18.695 del siguiente tenor: “Las municipalidades podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: letra g) El turismo

En consecuencia, en virtud del mérito de los hechos de la causa y del análisis normativo efectuado del ámbito de aplicación del Código del Trabajo y de la Ley N°18.883 se concluye en autos que la relación vinculante que existió entre la parte demandante y la municipalidad demandada estuvo amparada por el artículo 4° de la citada ley y en tal virtud las partes quedaron sujetas a las reglas de los contratos de honorarios celebrados los cuales el que conforme a su propia



regulación, podían expirar por el vencimiento del plazo estipulados en ellos, y, lo anterior es una razón contractual que legitimó su término, por aplicación del principio general del derecho común que dispone que los contratos válidamente celebrados es ley para los contratantes conforme a lo dispuesto en el artículo 1.545 del Código Civil y no pueden invalidarse sino por consentimiento mutuo o por causas legales, en la especie, el vencimiento del plazo estipulado en el último del contrato suscrito entre las partes, esto es, el 28 de febrero del presente año 2022.

Por todo lo anteriormente fundamentado, procede el rechazo de la demanda y con ello la acción de impugnación del despido, las pretensiones indemnizatorias del actor, la sanción de nulidad y la de cobro de prestaciones, todas materias, que son propias del término de un contrato de trabajo regulado por el Código del ramo, cuyo no es el caso de autos, por las razones jurídicas antes consignadas. Y por las mismas razones, se omite pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción, puesto que se opuso por la parte demandada de forma subsidiaria y en el evento de acogerse la acción declarativa de existencia de relación laboral.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 445, 446, 452, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo y Ley N°18.833, se declara:

I.- QUE SE RECHAZA la demanda interpuesta por doña Soledad Cristina Peña y Lillo Montecinos en contra de Ilustre Municipalidad de Talca, representada legalmente por don Juan Carlos Díaz Avendaño en su calidad de alcalde titular.

II. Que se condena a la parte demandante al pago de las costas de la causa por haber sido vencida totalmente en juicio, regulándose las personales en la suma de \$300.000 (trescientos mil pesos).

Las partes quedan válidamente notificadas de la sentencia definitiva en la actuación decretada para las 13.00 horas, del día de hoy 9 de diciembre del presente año 2022, asistan o no a la misma.



Sin perjuicio de lo anterior, remítase a sus respectivas defensas vía correo electrónico.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT O – 127 – 2022.

RUC N° 22-4-0392175-4

Dictada por doña Lis Aguilera Jiménez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.



A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>